



Detalles sobre la publicación, incluyendo instrucciones para autores e información para los usuarios en: <http://espacialidades.cua.uam.mx>

Alma Patricia Soto Sánchez (Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, México).

Territorios en disputa. Educación superior en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
pp. 42-59

Fecha de publicación en línea: octubre 2020

DOI: www.doi.org/10.24275/uam/cua/dcsh/esp/2020v10n1/Soto

© Alma Patricia Soto (2020). Publicado en *Espacialidades*. Todos los derechos reservados. Permisos y comentarios, por favor escribir al correo electrónico: revista.espacialidades@correo.cua.uam.mx

ESPACIALIDADES. Revista de temas contemporáneos sobre lugares, política y cultura Volumen 10, Núm. 01, enero-junio de 2020, es una publicación semestral de la Universidad Autónoma Metropolitana, a través de la Unidad Cuajimalpa, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Ciencias Sociales, editada en la Ciudad de México, México. Con dirección en **Av. Vasco de Quiroga 4871, Cuajimalpa, Lomas de Santa Fe, CP: 05300, Ciudad de México, México**. Página electrónica de la revista: <http://espacialidades.cua.uam.mx/> y dirección electrónica: revista.espacialidades@correo.cua.uam.mx. Editora en jefe: Dra. Fernanda Vázquez Vela.

Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título número 04-2018-072414222300-203, ISSN: 2007-560X, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número: María Fernanda Flores Torres (Dendrita Publicidad S. A. de C. V.), Temistocles.núm.79_int.3.ColoniaPolancoIVSección,AlcaldíaMiguelHidalgo,C.P.11550,CiudaddeMéxico; Fecha de última modificación: octubre del 2020. Tamaño de archivo 337 KB.

Espacialidades. Revista de temas contemporáneos sobre lugares, política y cultura tiene como propósito constituirse en un foro de discusión académica que aborda la compleja, contradictoria y multicausal relación entre el espacio y la vida social. *Espacialidades* se inscribe en el debate académico internacional sobre el giro espacial en las ciencias sociales e invita al análisis de diversas prácticas sociales y formas de organización y acción política desde una perspectiva multidisciplinaria que ponga énfasis en las diferentes escalas territoriales. Los textos publicados incorporan métodos y problemas tratados desde la sociología, la ciencia política, la economía, los estudios urbanos, la geografía, los estudios culturales, la antropología, la literatura, el psicoanálisis y el feminismo, entre otros.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del comité editorial.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa.

Directorio

RECTOR GENERAL: Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro

SECRETARIO GENERAL: Dr. José Antonio De los Reyes Heredia

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa

RECTOR: Dr. Rodolfo René Suárez Molinar

SECRETARIO DE UNIDAD: Dr. Álvaro Julio Peláez Cedrés

División de Ciencias Sociales y Humanidades

DIRECTOR: Dr. Roger Mario Barbosa Cruz

JEFE DE DEPARTAMENTO: Dr. Gabriel Pérez Pérez

Revista Espacialidades

DIRECTORA: Dra. Fernanda Vázquez Vela

ASISTENTE EDITORIAL: Mtra. Maricruz Gómez López, Mtra. Evelyn Guadalupe Cazares Jiménez

ADMINISTRACIÓN DEL SITIO WEB: Orlando Hernández Hernández

EDICIÓN TEXTUAL Y CORRECCIÓN DE ESTILO: Mtro. Hugo Espinoza Rubio

FOTOGRAFÍA DE LA PORTADA: © 2020 John Simitopoulos en Unsplash @john_simitopoulos, <https://unsplash.com/photos/ES2wTd6wztQ>

COMITÉ EDITORIAL: Dra. Montserrat Crespi-Valbona (Universitat de Barcelona, España), Dra. Verónica Crossa (El Colegio de México, México), Dra. Marta Domínguez Pérez (Universidad Complutense de Madrid, España), Dr. Marco Aurelio Jaso Sánchez (Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa, México), Dra. Graciela Martínez-Zalce (Universidad Nacional Autónoma de México, México), Dr. Alejandro Mercado (Universidad Nacional Autónoma de México, México), Dr. Jorge Montejano Escamilla (Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", México), Dra. Analiese Marie Richard (Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa, México), Dra. Rocío Rosales Ortega (Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México), Dr. Vicente Ugalde (El Colegio de México, México).

COMITÉ CIENTÍFICO: Dr. Tito Alegría (Colegio de la Frontera Norte), Dra. Miriam Alfie (Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa), Dr. Mario Casanueva (Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa), Dra. Claudia Cavallin (Universidad Simón Bolívar, Venezuela), Dr. Humberto Cavallin (Universidad de Puerto Rico), Dra. Flavia Freidenberg (Universidad de Salamanca, España), Dra. Clara Irazábal (Columbia University, Estados Unidos), Dr. Jorge Lanzaro (Universidad de la República, Uruguay), Dr. Jacques Lévy (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Francia), Scott Mainwaring (University of Notre Dame, Estados Unidos), Miguel Marinas Herrera (Universidad Complutense, España), Edward Soja † (University of California, Estados Unidos), Michael Storper (London School of Economics, Reino Unido).

Territorios en disputa. Educación superior en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

Disputed Territories. Higher Education in the Isthmus of Tehuantepec, Oaxaca

ALMA PATRICIA SOTO SÁNCHEZ*

Resumen

“La Licenciatura en Comunalidad puede revitalizar la comunidad”,¹ comentó Mariana, mujer joven de Comitancillo, al referirse a la forma en que este proyecto está aportando a enfrentar la detonación y revitalización de conflictos territoriales en la región del istmo, en los cuales se enfrentan la geopolítica neoliberal con las demandas históricas de los pueblos indígenas por su autonomía. Estos conflictos se dan por la instalación de los parques eólicos, las concesiones mineras, el decreto de las Zonas Económicas Especiales y el aún en definición Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec. En este sentido, el presente artículo busca analizar cómo la educación superior como proyecto etnopolítico —y la Licenciatura en Comunalidad como caso particular— se inserta en la geopolítica territorial, desencadenando nuevos procesos de reflexión y conformación de redes que representan una reinención de las comunidades, fortaleciendo la defensa de los territorios, el derecho a la autodeterminación y a la re-existencia de los pueblos en sus proyectos y sueños de futuro. Este artículo está enmarcado en el proyecto de investigación “Políticas de interculturalidad en educación superior en Oaxaca: proyectos educativos etnopolíticos”, que se realiza desde el proyecto de Cátedras Conacyt en el CIESAS Pacífico Sur.

Palabras clave: territorios Indígenas; Geopolítica; Movimientos Etnopolíticos; Educación Superior Intercultural.

Abstract

“The “Licenciatura en Comunalidad” can revitalize the community”, said Mariana, a young woman from Comitancillo, referring to way in which the project is helping communities to face the detonation and revitalization of territorial conflicts in the region of the Isthmus in which the neoliberal geopolitics faces the indigenous historical demands for autonomy. These conflicts are generated by the installation of wind farms, mining concessions, the decree of the Special Economic Zones, and the still in definition Program of Integral Development of the Isthmus of Tehuantepec. In this sense, this article analyses how Higher Education as an ethnopolitical project —the “Licenciatura en Comunalidad” as a particular case— inserts itself in the territorial geopolitics, triggering new processes of reflection and networking that can represent a reinvention of communities, strengthening the defense of territories, the right to self-determination and the re-existence of the Indigenous communities in their projects and dreams of future. This article is framed in the research project: “Intercultural Policies in Higher Education in Oaxaca: Ethnopolitical Educational Projects” carried out from the “Cátedras Conacyt” project in CIESAS South Pacific.

Keywords: Indigenous Territories, Geopolitics, Ethnopolitical Movements, Intercultural Superior Education.

Fecha de recepción: 12 de abril de 2019

Fecha de aceptación: 6 de diciembre de 2020

* Conacyt/CIESAS Pacífico Sur. C.e.: <altzilal@ciesas.edu.mx>.

¹ Haciendo referencia a la propuesta surgida en las comunidades de la Sierra Juárez, que se entiende como la conjunción de las formas organizativas y de apropiación del espacio en cuatro pilares: trabajo, fiesta, territorio y poder, a través de los cuales los pueblos indígenas oaxaqueños defienden su derecho a la autodeterminación y a la toma de decisiones sobre sus territorios y su futuro.

Introducción

La Licenciatura en Comunalidad, como apuesta etnopolítica, no es una iniciativa homogénea, la organización comunitaria que se encuentra diferenciada en las comunidades y regiones donde se está iniciando esta experiencia, desde distintos grupos, la convierten en una experiencia diversa y pluricultural, pero las intenciones y rumbos son compartidos, especialmente en lo concerniente a la defensa de la autonomía y del territorio, desde la apuesta por los jóvenes a través de la educación superior. Desde este corazón común, se van gestando procesos de apropiación del proyecto educativo; cada uno de los grupos va proponiendo su camino de aprendizaje, organización y conformación, y esto se entreteje con la recuperación del espacio y la defensa del territorio, desde la memoria sobre las luchas y disputas territoriales que han existido; sumado a esto, junto con las comunidades, plantea y construye propuestas para el presente y el futuro. Las sedes de la Licenciatura en Comunalidad que se encuentran en el istmo han tenido como principal reto el enfrentar múltiples conflictos territoriales con la geopolítica neoliberal, y la emergencia del sismo de septiembre de 2017, por lo cual, en muchos casos, a pesar de que tienen algunos años con la apuesta clara y reuniéndose para conformarse, los proyectos aún están en ciernes.

En este artículo, se busca responder a la pregunta: ¿de qué forma los proyectos etnopolíticos de educación superior se insertan en la geopolítica territorial del istmo de Tehuantepec, Oaxaca? Esta pregunta se enmarca en uno de los ejes del proyecto “Políticas de interculturalidad en educación superior en Oaxaca: proyectos educativos etnopolíticos”, perteneciente al proyecto de Cátedras Conacyt en el CIESAS Pacífico Sur. Este artículo responde al objetivo analizar el currículum pedagógico-político de la educación superior intercultural/comunitaria (ESI), desde el eje analítico del territorio y sus elementos epistemológicos, como un eje emergente. La metodología utilizada fue la revisión de fuentes secundarias e investigaciones realizadas previamente por la autora, así como entrevistas a profundidad y observación participante en reuniones durante los años 2017 y 2018 —como el Congreso de Comunalidad en 2017, el Congreso Comunitario “Alternativas y resistencias en Jaltepec de Cadayoc” y algunas reuniones llevadas a cabo en la ciudad de Oaxaca—, así como visitas a San Pedro Comitancillo, donde se realiza este proyecto de educación superior.

En un primer apartado se explica la geopolítica como marco conceptual, a través del cual se analizarán las racionalidades territoriales en disputa, entre el llamado desarrollo y la demanda de los pueblos indígenas por su autonomía; posteriormente, se reflexiona sobre el papel de los proyectos etnopolíticos de educación en esta disputa geopolítica; en otro apartado se presenta una mirada al vuelo de la historia del Istmo, para dar cuenta de los principales procesos de búsqueda de apropiación, acumulación por desposesión, la militarización y la violencia, asimismo se presentan algunos proyectos de defensa frente a dichos procesos, especialmente los enmarcados en una propuesta político-pedagógica que lucha por los jóvenes y por los territorios; en un tercer apartado se presenta la Licenciatura en Comunalidad, su origen, historia y conformación. En el último apartado se reflexiona sobre el proceso de ESI en la comunidad de San Pedro Comitancillo.

La geopolítica y los territorios indígenas

La geopolítica analiza las relaciones existentes entre el poder político y el espacio geográfico (Barrón, 2011). Se puede entender como herramienta interdisciplinaria para explicar acontecimientos históricos, fenómenos ideológicos (tanto políticos como religiosos), procesos de apropiación y despojo, disputas, guerras y negociaciones diplomáticas (Dodds y Atkinson, 2000), pero también da cuenta de los procesos desde los cuales las poblaciones locales y, en este caso, los pueblos indígenas, disputan el poder político y las decisiones sobre el espacio, desde una demanda de autonomía. La geopolítica encuadra también los procesos de sentidos y significados, cuya naturaleza cultural y política ponen en disputa distintas racionalidades, formas de vida y proyectos de futuro.

La geopolítica, como herramienta teórica, nos será entonces útil para entender espacios altamente disputados como los territorios indígenas en general y el istmo de Tehuantepec en particular. En México, la geopolítica devela cómo las disputas por el territorio están a flor de piel; existen dispersas en todo el territorio, especialmente en los territorios indígenas, se ven y se viven todos los días por los pueblos.

En este juego geopolítico, desde el Estado y el sistema económico, los territorios indígenas son construidos simbólicamente como “territorios atrasados”, y se les pone en la mira como potenciales beneficiarios de proyectos que conduzcan al desarrollo. Al existir, dentro de estos territorios, recursos considerados “bienes públicos”,² se promueve un “doble beneficio”: la extracción de la riqueza y llevar empleos que, según se reitera (bajo premisas que acompañan los proyectos de educación y desarrollo), siempre será una opción mejor que dedicarse al campo. Pero estos empleos, comúnmente resultan una opción precarizada, sin derechos, sin seguridad social y mal pagada (Soto, 2016; Soto y Robles, 2008). Aunado a esto, desde la perspectiva de la justicia ambiental (Martin, 2013), cuando llegan estos proyectos, a los pueblos indígenas no se les reconoce, ni se les toma en cuenta su participación, y los daños que se ocasionan, siempre quedan en los territorios, quienes los sufren son los habitantes locales o, en el peor de los casos, terminan teniendo que irse.

Así, proyectos de industrialización, minería, parques eólicos, presas, explotación de bosques, turismo, agroindustria y monocultivos, llegan a los territorios sin rostros ni nombres concretos tras de ellos, son corporaciones invisibles, divididas en empresas “filiales”, que se coordinan, pero que son notablemente independientes, actúan sin contar con una estructura centralizada de comunicación; borrosas en sus principales líneas de organización, pero con la claridad en sus estrategias (Appadurai, 2007: 44); tienen, además, gran capacidad para adaptarse al medio, cambiar sus nombres y desaparecer. Aunque el planeta entero está en juego, y nada queda fuera de ese espacio “abstracto” que se vuelve potencialmente recurso (Lefebvre, 1974), son los territorios de los pueblos indígenas espacios codiciados, porque han conservado su diversidad tanto cultural como ecológica; se observa cómo, en un juego al estilo Monopoly,³ se van rellenando los mapas, de infraestructura, inversiones y demás proyectos extractivos y de desposesión, bajo pretexto del “bien de todos, del progreso y del desarrollo” (Blaser *et al.*, 2004; Soto, 2016).

El “crecimiento perpetuo” y la generación de riqueza, que se concentrará en manos de unos cuantos, se vive como imposición en los territorios indígenas, pero, paralelamente, estos se vuelven sistema, alineando leyes y Estados; estableciendo las condiciones de seguridad, impuestos, laborales, etc. (Hirsch, 2001), que facilitan su existencia y promueven su permanencia. Así, pareciera que la tierra está de oferta y se vende al mejor postor; como consecuencia, quienes habitan estos territorios se vuelven un estorbo, desde otras lógicas que no son sólo económicas; quienes se oponen a la supuestamente beneficiosa inversión, el crecimiento y el desarrollo, son rápidamente “corregidos” a través de la fuerza gubernamental, o incluso asesinados⁴ (CDPIM, 2013: 108; Global Witness, 2016; Hirsch, 2001).

Se gesta así una geopolítica del desarrollo (o neoliberal), que invade los espacios de vida de los pueblos, bajo pretextos de un supuesto bienestar, el cual nunca llega. Se inscribe esta geopolítica en procesos de políticas públicas, que trascienden los tiempos y formas comunitarias. Frente a esto, surgen procesos etnopolíticos que gestan sinergias y tejidos que, desde múltiples comunidades y como parte de sus estrategias para la construcción de su autonomía y la defensa de sus territorios, conforman proyectos educativos propios, que aventuran la formación política de las nuevas generaciones.

Así, el avance de la economía neoliberal —que aterriza en distintos territorios— es la fuente de mecanismos de violencia contra la autonomía de los pueblos indígenas; pareciera que tanto las corporaciones, como el propio Estado creen ver en esta autonomía un “freno al desarrollo”. La alusión a la autonomía como derecho colectivo, en contraposición al derecho privado e individual, es permanente en las disputas por los territorios que quieren ser apropiados o explotados por las grandes corporaciones (Bello, 2004), un tema que se constata en la historia regional y en la cobertura educativa, como se describe a continuación.

² Los bienes públicos refieren a la forma en que los Estados nacionales se asumen administradores de las riquezas del subsuelo (como los minerales o el petróleo), así como del agua y ciertas tierras, con el consecuente derecho a explotarlos o concesionarlos a terceros para su explotación, bajo el supuesto del desarrollo nacional.

³ Juego de mesa en el que el objetivo es la creación de riqueza a partir de la conquista de territorios, representados en el tablero, en el cual gana quien adquiere más y gana más.

⁴ La organización Global Witness señala que, en promedio, dos personas son asesinadas cada semana defendiendo sus tierras, bosques y aguas contra la expansión de este tipo de proyectos.

Territorios indígenas, educación y geopolítica

De acuerdo con lo planteado en el apartado anterior, entendemos que el territorio es una construcción geopolítica, conformada desde las culturas, la historia y las formas de organización social y política (Rodman, 1992). Contrario a los imaginarios de estereotipos etnizados, los territorios de los pueblos indígenas nunca han sido espacios aislados, sino que siempre están en constante comunicación y vinculación con los procesos regionales, las lógicas nacionales e incluso internacionales (Massey *et al.*, 1999: 18). Por tanto, la geopolítica nos da pautas para considerar los territorios indígenas desde su conformación, es decir, desde su historia y como entramado de relaciones nacionales e internacionales; poniendo especial atención a los procesos y dinámicas, mediante las cuales los espacios y lugares son construidos e imaginados, percibidos, establecidos, apropiados, vividos y cuestionados (Gupta y Ferguson, 1992: 18; Lefebvre, 1991), y en confrontación permanente con el espacio construido desde las lógicas del capital. El istmo de Tehuantepec, como territorio, se retoma en el siguiente apartado, buscando remitir a la forma en que, a través de su historia, distintos procesos geopolíticos han ido sedimentando, para configurar este espacio de manera particular.

El papel de la educación en la geopolítica y en este entramado de relaciones en el territorio se vive como tensión permanente, pues es, al mismo tiempo, una demanda y ha representado una puerta para las lógicas del Estado y del capital. Por su profundo origen castellanizador y como formadora de ciudadanos para el Estado, así como mano de obra para los centros urbanos y la industria (que incluye a la agroindustria), genera una disrupción en las relaciones con el territorio, desde el secuestro de las experiencias y la imposición de otros saberes que restringen la transmisión de saberes locales a las nuevas generaciones, al mismo tiempo que genera nuevas subjetividades y anhelos de futuro.

Así, en muchos lugares, la educación pública —que al ser ajena a la vida de las comunidades, estandarizada y homogeneizadora— es camino pavimentado hacia ninguna parte —ya que, si llega a representar salir y obtener una cierta movilidad social, las y los jóvenes posiblemente dejen de lado el vínculo con sus pueblos— y en los casos en que la educación no posibilite un cambio en el nivel de ingreso —considerado como movilidad social—, la situación de pobreza continuará, pero incluyendo el desarraigo dado a través del proceso educativo (Barrón, 2011; Corbett, 2000; Soto, 2016); como ejemplo, la educación superior en México —y Oaxaca no es la excepción— continúa siendo centralizada, se ubica en zonas urbanas y se enfoca en nociones occidentales de carreras y programas de estudio (Mateos y Dietz, 2016).

Por tanto, la relación de las comunidades con los territorios se entiende conjugada con sus posicionamientos frente a un sistema político, cultural y económico, cuya expansión busca incorporarlos, en tanto ciudadanos individualizados, como fuente de materia prima y mano de obra, muchas veces a través de la oferta educativa.

En distintos momentos y geografías, frente a este sistema, se han gestado proyectos políticos de resistencia y re-existencia, desde estrategias diversas de defensa territorial y desde la demanda de autonomía, como reivindicación histórica e identitaria, es decir, etnopolítica, defendiendo el derecho a la vida, tanto de ellos como pueblos, como de los otros que ahí habitan:

el término territorio denota mucho más que un pedazo de tierra —incluye todo el ambiente físico y sus recursos—; es también el espacio donde la experiencia colectiva y la memoria son sagradas e íntimamente relacionadas con los seres vivos; incorpora también la libertad de las expresiones culturales y religiosas y el control político (Aikman, 1995).*

Desde los movimientos etnopolíticos, las luchas en torno al territorio se agrupan en tres líneas de demandas: 1) la tenencia y propiedad de la tierra; 2) el control de la producción (decidir qué producir, cómo y su comercialización); 3) las luchas por la defensa de la naturaleza (Toledo, 1999).

* Excepto donde se señale, las traducciones son mías.

Estas luchas y demandas se organizan, comunican y viven de manera diferenciada en cada comunidad, pero confluyen en la demanda por la autodeterminación; especialmente frente a proyectos extractivos, de despojo y desposesión. Así, la autodeterminación, abanderada no sólo por los movimientos etnopolíticos en México y América Latina, sino a nivel mundial, representa un pilar fundamental en los logros tenidos en la legislación internacional en materia de pueblos indígenas; esto, en muchos casos, abre camino para los cambios en las legislaciones nacionales, pero parece estar aún lejos de ser posibilidad jurídica.

Entre estas búsquedas y demandas, en algunos lugares la autodeterminación ya es vivencia cotidiana, es decir, se asume la autonomía de facto, la cual parece resonar con lo que propone Anaya (1996: 77): “la autodeterminación es un orden institucional en el cual individuos y grupos pueden tomar decisiones significativas en los aspectos relacionados con todas las esferas de la vida de manera continua”. No se trata de un “dentro/fuera”, sino de un espectro de relaciones múltiples y multiescalares, además de la decisión sobre las formas y rutas que tome el desarrollo “económico, social y cultural”. Como se verá más adelante, en algunas comunidades de la región del istmo, así como de la Sierra Sur, donde surgen la Licenciatura en Comunalidad, la demanda y la vivencia de facto de la autodeterminación, que fueron procesos simultáneos, entrelazados para buscar la consolidación de sus proyectos de futuro, cuyo centro es el permanecer en sus territorios (facilitador de la licenciatura, comunicación personal, marzo de 2018), y se tornan resistencia frente a las lógicas del capital que los quieren expulsar.

En este tenor, la educación superior, desde una propuesta propia, como la Licenciatura en Comunalidad, apunta la autodeterminación y, por tanto, es parte del proyecto político posicionado frente al sistema cultural, económico y político del Estado y del capital, tomando un papel preponderante; expresado no sólo en la disputa por los jóvenes, sino también como trinchera desde la cual se defienden los territorios.

Geopolítica del Istmo de Tehuantepec

A diferencia de otros territorios de pueblos indígenas,⁵ el istmo de Tehuantepec, por su condición y ubicación geográfica, es un espacio en donde la relación con los intereses nacionales e internacionales se dibujan explícita, pública y claramente; su interconexión ha conllevado a que la historia de esta región sea compleja y llena de claroscuros, tensiones, resistencias y violencias. Escapa la intención de este artículo presentar una historia a detalle de la región y las disputas territoriales suscitadas dentro de ésta, pero sí es importante resaltar algunas líneas de intervención, en el tenor antes presentado, desde el Estado-nación⁶ y su lógica geopolítica, que busca favorecer el progreso y el desarrollo, así como los intereses extranjeros;⁷ y esto no es sólo historia antigua, sino un constante golpeteo que no deja de estar presente en el momento actual.

El istmo de Tehuantepec se divide geográficamente en dos subregiones: el istmo veracruzano (al norte) y el oaxaqueño (al sur); como característica geográfica distintiva, es una franja prácticamente llana, en donde los océanos Pacífico y Atlántico se encuentran a una corta distancia, en su parte más angosta del Golfo de Tehuantepec al Golfo de México median 320 km. En la actualidad, habitan cerca de una docena de grupos indígenas, de los que destacan los binní⁸ zaa (zapotecos), los zoques, los ayuuk (mixes), los ikoots (huaves) y los chontales (Soto y Robles, 2008).

⁵ Esto en relación con los estereotipos etnizados acerca de los territorios indígenas, definidos como las áreas donde se concentra la población indígena, [que] se encuentran en las zonas más accidentadas del país, de más difícil acceso y con deficiencias en los sistemas de comunicación, esto, entre otros factores, lo que ha propiciado que registren los mayores atrasos económicos y los índices de marginación más altos en el país.

⁶ Es decir, se soslayan muchas disputas entre los mismos pueblos y entre comunidades, no porque no sean importantes o carezcan de carácter explicativo a la hora de hablar de la configuración regional, sino por razones de espacio y del objetivo de este trabajo.

⁷ Sin dejar de reconocer que existen disputas entre los grupos étnicos que ahí habitan y que han existido, según algunos estudios, desde la época prehispánica.

Desde una lógica geopolítica, se le impuso al istmo una vocación de puente interoceánico, misma que ha sido disputada desde los pueblos indígenas que ahí habitan, a través de luchas de distinta índole; ya en la época colonial, Hernán Cortés generó una expansión económica a través del puerto de Tehuantepec, y estableció ahí una industria naviera. Tehuantepec fue importante para la exportación de productos mineros, ganado mayor y grana cochinilla, de gran importancia en esta época (Woodrow, 1954).

En 1660, estallaron rebeliones contra la autoridad de los alcaldes mayores y corregidores en varias provincias del Obispado de Oaxaca; durante un año, indígenas zapotecos, mixes, chontales y huaves de centenares de comunidades mantuvieron el control de sus territorios, desde Tehuantepec hasta Nexapa y Villa Alta (Díaz, 1992).

En el México independiente, hacia la década de 1840, Benito Juárez, entonces gobernador de Oaxaca, desplegó fuerzas militares para terminar una nueva rebelión en Juchitán, y se movilizó hacia el istmo para lograr que los rebeldes entregaran las armas, porque se temía una invasión extranjera en el puerto de La Ventosa (Díaz, 1992).

En 1853, Santa Anna decretó la creación del Territorio Federal del Istmo de Tehuantepec, con capital en Minatitlán; en Puerto México (ahora Coatzacoalcos), habitaban estadounidenses, que vieron esta medida favorable a sus intereses, porque fortalecía su injerencia tanto en este puerto, como en el de La Ventosa. Por otro lado, la rebelión de los campesinos y comerciantes de Juchitán, que solicitaban autonomía de Tehuantepec, estaban al tanto de las consecuencias separatistas en Centroamérica, con injerencia estadounidense, y les parecía muy peligroso mantener un territorio libre en esta región tan codiciada por otros países, por lo que se mantuvieron cautelosos frente a esta medida. Cuando los liberales tomaron el poder, se derogó el decreto y Tehuantepec volvió a integrarse al estado de Oaxaca (Díaz, 1992).

En 1859, durante la presidencia de Benito Juárez, con la firma del Tratado McLane-Ocampo,⁸ se pretendía permitir el tránsito de mercancía de Estados Unidos a través del istmo. El Estado mexicano prometía no cobrar impuestos a los extranjeros que utilizaran este camino y garantizar la seguridad a través del paso, en caso de que esto último no fuera suficiente, se dotaba consentimiento al gobierno de Estados Unidos para hacerse cargo.

Porfirio Díaz, a través del decreto de la “Ley Agraria de Baldíos y Colonización” (Marino, 2001), propició que muchos extranjeros se apropiaran de territorios indígenas para la explotación de los recursos naturales, principalmente madera y minerales. Más tarde, inició la construcción del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, concesionado a la empresa inglesa Pearson & Son, inaugurando la obra en 1907. Cuentan los habitantes de la comunidad zoque de Shivixhuyo, del municipio de Asunción Ixtaltepec, que los bosques de su comunidad se talaron para ser utilizados como durmientes para esta obra. En esta misma época, se habilitó el puerto de Salina Cruz (Connolly, 1994; Kuntz, 1999; Soto, 2016). De 1907 a 1915, aproximadamente, Salina Cruz se convirtió en el puerto comercial más importante para el paso interoceánico.

Al abrirse las vías de ferrocarril, también los mercados locales e internos se modificaron, porque los latifundistas expandieron sus horizontes comerciales, con lo que el mercado campesino se redujo y los ingresos reales de los campesinos se vieron afectados, mientras que el dinero aumentó para los terratenientes (Connolly, 1994; Kuntz, 1999). Se construyó dentro del territorio nacional una red de ferrocarriles, cuya prioridad era conectar los centros mineros y las zonas que generaban productos para la exportación, hacia y desde la Ciudad de México, hacia el Golfo y hacia Estados Unidos, que se instauraba como principal socio comercial. En la comunidad de Ixtaltepec, cuentan los abuelos que, por ser en ese momento uno de los centros comerciales regionales, se les presentó el proyecto de tener una estación del ferrocarril, pero los habitantes

⁸ Tratado McLane-Ocampo (1859), art.1° “cede la República Mexicana a los Estados Unidos y sus conciudadanos y bienes, en perpetuidad, el derecho de tránsito por el istmo de Tehuantepec, de uno a otro mar, por cualquier camino que actualmente exista o que existiese en lo sucesivo, sirviéndose de él ambas repúblicas y sus ciudadanos”. Art. 3° “No se impondrán a los extranjeros y sus propiedades que pasen por ese camino contribuciones ni derechos mayores que los que se impongan a las personas y los bienes de los mexicanos”. Art. 5° “Conviene la República Mexicana en que si en algún tiempo se hiciese necesario emplear fuerzas militares para la seguridad y protección de las personas y los bienes que pasen por alguna de las precitadas rutas, empleará la fuerza necesaria al efecto; pero si por cualquiera causa dejase de hacerlo, el gobierno de los Estados Unidos, con el consentimiento, o a petición del gobierno de México, o de su ministro en Washington, o de las competentes y legales autoridades locales, civiles o militares, podrá emplear tal fuerza con éste y no con otro objeto; y cuando, en la opinión del gobierno de México, cese la necesidad, inmediatamente se retirará dicha fuerza” (documento electrónico).

del pueblo decidieron que eso cambiaría la vida, al punto de volverla irreconocible, y no aceptaron. La estación fue construida en Ciudad Ixtepec, lo cual implicó un cambio en las lógicas comerciales regionales, las cuales se mudaron de centro, tomando Ixtepec dicho lugar. La estación hizo que esa comunidad se “desarrollara” y que, además, se ubicaran ahí dos bases militares, a las que se suman en la región el aeropuerto militar y el destacamento de la marina en Salina Cruz. La vida de esa localidad fluyó alrededor de las vías del tren y del desarrollo económico que esto trajo.

Este mismo tren, de acuerdo con las políticas de transporte y eficiencia en tiempo y costo, dejó de ser de pasajeros para convertirse sólo en transporte de mercancía —proceso que inició a partir de su privatización en 1994—, aunque, como es común, la política no logra ordenar completamente la vida, ahora transporta miles de migrantes centroamericanos, que en ratos se ven por los alrededores de la vía descansando, pidiendo algo de comida, mientras retoman su camino en “La Bestia”⁹ hacia Estados Unidos. Y ahora se suman a estos procesos proyectos de minería y parques eólicos.

Algunos consideran que Ixtaltepec “perdió” una oportunidad de desarrollo, ellos consideran que ganaron la posibilidad de mantener sus formas de vida y organización, su paz y su destino en sus manos (Soto, 2016). Y aunque disputan, por ejemplo, la propiedad de las tierras del aeropuerto y la base aérea, su base económica es la agricultura, la ganadería y el trabajo en barro.

En 1914, con la apertura del canal de Panamá, el movimiento armado de 1910, el azolvamiento de la bahía donde se había construido el puerto de Salina Cruz y la falta de mantenimiento de ésta, convirtieron el lugar donde entraban los barcos en una playa arenosa, por lo que el puerto se cerró al tráfico y el incipiente corredor interoceánico tuvo un largo periodo de decadencia, hasta que en la coyuntura de la segunda guerra mundial, con la construcción de un oleoducto y el ferrocarril, se volvieron a incrementar sus actividades (Glick, 1953). A mediados de los años cincuenta, se construyó la Carretera Transístmica, que une a los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, así como la Carretera Panamericana en el tramo Oaxaca-Juchitán, que dieron gran impulso a esta población, la cual empezó a adquirir importancia como polo de desarrollo y ciudad comercial, cosa que logró consolidar a partir de los años sesenta del siglo xx (Soto y Robles, 2008).

En el resto del país, durante los años cuarenta y cincuenta, el entonces presidente Lázaro Cárdenas gestó un proyecto basado en un profundo nacionalismo, que echó raíces corporativistas, las ramas del sistema educativo, del sistema de salud, de carreteras, de alimentación, fueron llegando con la noble misión de “mexicanizar”¹⁰ a los indios y a los campesinos (Soto, 2016). En este tiempo, inició la construcción del andamiaje del progreso y la modernidad; las “comunidades rurales” se transformaron. El cemento fluyó y con la mano de obra local hicieron sus escuelas, centros de salud, canchas de basquetbol, tiendas Diconsa, casetas telefónicas, abrieron brechas y caminos; hicieron en los lugares todo lo que se pensaba que como espacios se necesitaba, para que las siguientes generaciones tuvieran educación, salud, deporte, “alimentos”, luz y caminos, que representaba en el imaginario social una mejor calidad de vida.

Durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez se impulsó un programa de desarrollo en el que se construyeron carreteras, se intensificó la explotación petrolera y se inauguraron refinерías y complejos petroquímicos en Salina Cruz y Coatzacoalcos. Se crearon empresas azucareras, arroceras, cementeras y mineras; se realizó el estudio de factibilidad de un ferrocarril interoceánico que, a fin de cuentas, se desechó (Soto y Robles, 2008).

La idea del paso de mercancías a través de un corredor interoceánico resurgió durante el gobierno de José López Portillo (1976-1982), época en la que se propuso un programa denominado Alfa-Omega, que nunca fue ejecutado; aunque se impulsó un extenso programa de explotación de hidrocarburos (Martínez *et al.*, 2002). Pero no fue sino hasta julio de 1996, cuando, en el gobierno de Ernesto Zedillo, se anunció el Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec (conocido también como Megaproyecto del Istmo), que incluía la privatización y modernización de la infraestructura de comunicaciones, portuaria, urbana y de complejos petroquímicos; plantaciones de eucalipto y palma africana; la creación de granjas camaronícolas, explotación de yacimientos mineros, ampliación de zonas turísticas y la instalación de plantas maquiladoras (Beas, 2002).

⁹ Nombre con el que los migrantes denominan al tren.

¹⁰ Que se “trajeron” en obligarlos a aprender el español, al mestizaje e “incorporarlos” a la sociedad nacional de los pueblos indígenas.

La historia muestra que siempre ha existido oposición local a los diversos proyectos de desarrollo centralizados, pues sus tendencias son excluyentes y generadoras de polarización social. El Megaproyecto del Istmo no fue la excepción, y dentro de las distintas actividades de resistencia, se realizó una reunión denominada “El Istmo es nuestro”, en la que participaron autoridades municipales y comunales, organizaciones sociales e instituciones académicas de toda la región (Beas, 2002); en dicho encuentro se discutió cómo, a través de distintos proyectos llamados de desarrollo, se ha causado el deterioro ambiental, sin siquiera reportar una verdadera dinamización de la economía regional; se viven grandes desigualdades y no ha surgido una auténtica planeación del aprovechamiento de los recursos, mucho menos una forma de buscar utilizar la ubicación estratégica de la región, que respete la autonomía de los pueblos indígenas y el equilibrio de los ecosistemas. Es decir, la historia compartida mostró que los avances han sido menores, y a pesar de la oposición, los proyectos se realizan, aunque sólo parcialmente, dada la importancia geopolítica de la región, y casi nunca traen beneficios para los habitantes locales.

Otro momento importante, de nuevos embates territoriales fue el Plan Puebla-Panamá, anunciado por Vicente Fox en 2001, el cual se plantea como un megaproyecto de desarrollo integral que pretende incluir todo el sureste mexicano y traspasar las fronteras del país, esta visión territorial profundiza las desigualdades continentales regionales, que fueron constituyendo en un proceso de largo aliento (Hiernaux, 2002). Acorde con esta visión:

las políticas de desarrollo para el sur de México contemplan la integración con el istmo centroamericano desde un criterio más operativo, mediante cinco ejes: el eje transístmico (Coatzacoalcos-Salina Cruz), el eje Pacífico (Socunusco-Panamá), el eje del Golfo de Honduras (ciudad de Guatemala-Golfo de Honduras), el eje del Petén (Petén-Palenque) y el eje Guatemala-Yucatán por el Caribe mexicano y atravesando Belice (Booz *et al.*, 2000).

La integración así planeada denota claramente la geopolítica neoliberal, presente en los planes y programas de desarrollo nacionales alineados a los intereses extranjeros. De acuerdo con Hiernaux (2002), a partir de esta territorialización aparece la región política transnacional, y desaparece el discurso sobre la región como subespacio del territorio nacional (Soto y Robles, 2008).

No es gratuito, entonces, que en el Plan Estatal de Desarrollo Sustentable (PEDS) 2004-2010 del estado de Oaxaca, uno de los proyectos estratégicos para el istmo sea, precisamente, el corredor transístmico para reactivar en la región el puerto de Salina Cruz, a través de la terminación de obras de infraestructura carretera, la modernización del ferrocarril y el aeropuerto (Soto y Robles, 2008).

En 1996, Ernesto Zedillo anunció la puesta en marcha de las zonas económicas especiales (ZEE), una vez más, buscando preparar a los territorios para hacerlos más competitivos y que se cumpla su función geopolítica —el discurso pareciera repetirse a través de la historia—; así, se ofertaron, a través de esta denominación, facilidades fiscales, aduaneras, seguridad, subvenciones gubernamentales y el desarrollo de una plataforma logística y de infraestructura; ordenamiento territorial, adquisiciones de tierras, desvíos de corrientes de agua y, respecto del tema que nos ocupa, también se ofertaron cambios a nivel educativo, al servicio de los proyectos transnacionales. Todo ello con un aumento en la intensidad de la explotación de la fuerza de trabajo y de los recursos naturales (Ávila y Ávila, 2017).

Específicamente, en el corredor del istmo de Tehuantepec se tiene planeado instalar industrias automotrices, forestales, mineras y siderúrgicas —particularmente una acerera (Sánchez, 2017) —. En los últimos años, el puerto de Salina Cruz ha estado relacionado con el transporte de las piezas para los aerogeneradores de los parques eólicos que se han instalado, en el marco de la producción de energías renovables, en un modelo de capitalismo verde (Flores, 2015); siendo uno de los puntos donde mayor cantidad de programas de energía eólica se han desarrollado y donde la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID) tiene cada vez más acciones de presencia y de impulso a las energías renovables (Ávila y Avila, 2017).

Con estos fragmentos de la historia, observamos cómo esta región, desde su posicionamiento estratégico como espacio en los mapas de la geopolítica transnacional, es puerta de salida y entrada, además de puente interoceánico de recursos

energéticos y mercancías, generando la confluencia de intereses internacionales que buscan su apropiación y explotación (Martínez, 2002). Estos proyectos no llegan como una ola, sino que se van apareciendo poco a poco —aunque en los planes y proyectos parecieran un gran bloque—. Debido a la fuerte resistencia habida en esta región, no han resultado totalmente como se han planeado, pero ello no evita que se tengan manchones, partes de éstos en pie y en el territorio, como los parques eólicos sembrados que se pueden ver en el horizonte,¹¹ y que las disputas y conflictos socioambientales continúen.

Como ya se mencionaba, estos procesos no han sido unidireccionales, pues en la región los movimientos etnopolíticos han tenido distintos procesos, por ejemplo, la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo de Tehuantepec (COCEI), que abanderó un proceso político, de defensa de la tierra y de la propiedad común, desde la identidad zapoteca; está la Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), cuya labor ha estado encaminada a la recuperación de tierras, la defensa de los derechos indígenas, la comunicación, y la producción; la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI), con una organización para la producción orgánica y venta de café que es considerada la pionera del comercio justo y que tuvo un proyecto de educación de técnicos orgánicos (Centro de Educación Campesina, CEC), que impactó no sólo en esta región y en el estado, sino en el sur de México, Centro y Sudamérica; las Comunidades Campesinas en Camino (CCC), que a través de la producción, comercialización e industrialización del ajonjolí y la producción de carne orgánica, han generado procesos de organización y defensa del territorio; el Centro de Derechos Humanos del Tepeyac, cuya función ha sido central en la defensa del territorio y de los pueblos como defensores de éste;¹² el Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio.

Sumados a estos procesos, están las redes y vínculos con movimientos sociales como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y la Licenciatura en Comunalidad. En esta “foto panorámica” de los procesos de lucha por el territorio, se detectan las tres líneas de demandas planteadas por Toledo (1999). Pero la defensa de la propiedad y tenencia de la tierra, la autonomía para decidir sobre ésta —en la producción y comercialización, y la defensa de la naturaleza—, se entretajan en todos los casos con la permanente intención que las nuevas generaciones se involucren y en el futuro tengan espacios para la vida digna; por lo cual se ha ido volviendo parte de todos estos procesos de lucha por el territorio el anhelo y, por consecuencia, la búsqueda, planeación y conformación de redes para contar con proyectos educativos propios.

Por lo que se encuentran distribuidos en el territorio distintos proyectos educativos, como la Escuela Preparatoria por Cooperación de Ixhuatán, la red de bachilleratos comunitarios (Bachilleratos Asunción Ixtaltepec), en Santa María Quiégolani, San Mateo del Mar, San Pedro Mártir Quiéchapa, San José el Paraíso, Jaltepec de Candayoc, que luego se mudó a San Felipe Zihualtepec, Colonia Cuauhtemoc, San Francisco la Paz, el Instituto Superior Intercultural Ayuuk (ISIA); el No a la mina en San Miguel Chimalapa, que gracias a la movilización de las y los jóvenes, y a algunos estudiantes del Bachillerato Integral Comunitario (BIC), se informó a todas las agencias del municipio acerca de la concesión minera; esta movilización logró que se detuviera el proceso de entrada de la minería (Soto, 2016). Pero, debido al aumento de escolarización y a las perspectivas de futuro de los y las jóvenes, la disputa actual centra su mirada en los procesos de la educación superior, por ello la Licenciatura en Comunalidad ha cobrado relevancia.

Desde la geopolítica observamos cómo, en lo antes narrado, el territorio se disputa desde distintos proyectos de presente y futuro, bajo distintas percepciones y significados de éste. “Para las corporaciones, la inversión de capital es expectativa de ganancias excepcionales”, que ha sido acompañada de una oleada creciente de violencia, militarización y paramilitares (Morosin, 2017), hacia “la comunidad, su territorio, su forma de vida y la reproducción de su cultura” (Garibay, 2010: 34; Flores, 2015). Desde las comunidades, la disputa es por mantener el control de sus territorios, su autonomía, sus formas de vida, así como para mantenerse en sus territorios, desde sus identidades culturales; es decir, viven esta lucha desde distintos proyectos etnopolíticos.

¹¹ Para una revisión más detallada sobre el proceso de los parques eólicos, véase la tesis de Flores Cruz (2015).

¹² Estos procesos se enmarcan en la Teología de la Liberación que, como propuesta filosófica y pastoral, promovía la generación de procesos de lucha y defensa de la vida, así como de organización. También es considerada dentro de la geopolítica del conocimiento como parte de los esfuerzos por generar otras filosofías, desde otras formas de vivir, entender y hacer el mundo.

Licenciatura en Comunalidad, movimientos etnopolíticos: una geopolítica comunitaria

Como ya se mencionó, la educación superior, vista desde la geopolítica, evidencia su lógica de centralización, su ubicación en zonas urbanas y enfocada a nociones occidentales de conocimientos enciclopédicos, además de su alineación a los proyectos económicos de explotación de la naturaleza y el trabajo (Mateos y Dietz, 2016). En el Programa de Educación Superior de Oaxaca (PESO) 2011-2016, los datos muestran que en las ocho regiones que conforman la estructura geográfica del estado se cuenta con instituciones de educación superior (IES), con una distribución que implica “una concentración del 45 por ciento en la región de los Valles Centrales, el 14 por ciento en el Istmo y 10 por ciento en la Mixteca” (PESO, 2012: 12, citado en Calvo, 2017). En general, la expansión de la es a las regiones ha estado marcada por una fuerte tendencia hacia lo tecnológico.

Ante este panorama, y acompañados de las disputas por la vida y los territorios, como ya se enlistaba anteriormente, surgen procesos educativos en los que la enseñanza es un proceso político y politizado; entrelazados con las luchas por los territorios, está la lucha de los jóvenes de las comunidades, así como la disputa por la geopolítica del conocimiento, es decir, la constante apuesta por revertir la subordinación y la subalternización de las formas y sistemas de conocimientos comunitarios e indígenas.

En estas luchas que se entretelen y retroalimentan más allá de los espacios locales, pero siempre asentadas en un territorio específico, los proyectos de educación superior etnopolíticos se vuelven trinchera para la defensa de un proyecto de futuro: permanecer y continuar (reinventando) la vida en sus territorios originales. Desde estos horizontes de disputa por el territorio es donde, aunque parecieran geográficamente lejanos al istmo, surgió la Licenciatura en Comunalidad, que está siendo injertada en los proyectos etnopolíticos de comunidades en el istmo de Tehuantepec, para gestar su propio camino y proceso, de la mano de las luchas por el territorio.

La Licenciatura en Comunalidad es una propuesta planteada desde los fundamentos de la “comunalidad”.¹³ En este sentido, este concepto, de principio de vida de las comunidades —y principio de lucha etnopolítica— se transforma en propuesta metodológica universitaria para nivel licenciatura y maestría, para un aprendizaje que responda a las necesidades de los jóvenes y de sus comunidades.

El proceso histórico a partir del cual se genera esta licenciatura ancla sus raíces en la disputa territorial; a partir de una experiencia concreta de lucha por la tierra y de defensa de un modo de vida, se ha ido gestando lo que hoy es una propuesta educativa a nivel superior en distintas regiones y comunidades, que busca fortalecer procesos etnopolíticos de resistencia, abriendo, además, espacio para la búsqueda de posibilidades de futuro para las comunidades, donde se ha ido implementando. Se retoman en este artículo algunos puntos nodales del proceso histórico y social del que surge la Licenciatura en Comunalidad, para entender la forma en que esta propuesta se gesta y se entretene con procesos sociales y etnopolíticos en el estado de Oaxaca.

Un primer momento nodal en la historia es la Organización en Defensa de los Recursos Naturales y Desarrollo Social de la Sierra Juárez (Odenasij), formada en 1980 por trece comunidades que exigían la devolución de sus derechos sobre sus bosques, que hasta ese momento estaban concesionados a Fapatux, S.A. de C.V.,¹⁴ una empresa paraestatal que hacía tanto el aprovechamiento como la transformación de la madera, explotando la naturaleza y la fuerza de trabajo, sin dejar casi nada a cambio en las comunidades.

La demanda de recuperación de los derechos sobre el bosque cobró fuerza desde la bandera de la Comunalidad¹⁵ (Martínez, 2015), la cual, como discurso etnopolítico, daba entidad a la propiedad social de la tierra; la organización política y social, desde las asambleas y sistemas normativos locales; el trabajo colectivo y las fiestas, como ejes de la autodeterminación

¹³ Esto implica una geopolítica del conocimiento, ya que se basa en una propuesta teórico/metodológica que surge desde personas originarias de pueblos indígenas para explicar y nombrar sus formas de vida frente a procesos del estado y la industria.

¹⁴ Grupo de Fábricas de Papel de Tuxtepec, proyecto en la región del istmo que formó parte de los proyectos de desarrollo ya discutidos en el apartado anterior.

y la capacidad de decisión sobre los territorios. Esta lucha dio pie a una forma de aprovechamiento forestal comunitaria, que es emblemática como proceso de autodeterminación y de organización indígena y comunitaria, pues consiguió echar abajo el decreto presidencial, recuperando el manejo de sus bosques.

Lo anterior dio pie a iniciar procesos de organización de empresas forestales comunitarias, en distintas comunidades de la región (Bray *et al.*, 2005; Chapela, 1999; Ostrom, 2000; Winder, 1992) y a un movimiento etnopolítico que también retomó el tema de la educación y la cultura en sus bases de movilización.

Un segundo momento, referido por Arturo Guerrero (comunicación personal, 2017a; 2017b) es la creación de la Fundación Trova Serrana, que más tarde sería la Fundación Comunalidad, con presencia (a través un proyecto de educación comunal de 1997 a 1999) en varias comunidades. Algunos de los proyectos fueron en Guelatao, como la radio y el teatro, donde la relación comunalidad-arte-educación eran el eje; una banda de música y cultivo de setas en Santa María Jaltianguis, una revista impresa en Talea de Castro; con los jóvenes del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) de Capulalpám de Méndez, un proyecto sobre la contaminación y la basura. En estos distintos proyectos y talleres, se empezaron a plantear los principios metodológicos de la educación comunal; todos los proyectos estaban relacionados con el territorio. En cada una de estas comunidades, los procesos iniciados tuvieron distintos derroteros, y los propios procesos de producción, organización y defensa del territorio han ido por distintas vertientes, por ejemplo, Talea de Castro fue una de las primeras comunidades en contar con una red de telefonía comunitaria; Calpulalpam de Méndez tiene un sólido proyecto de aprovechamiento forestal y un proceso de defensa contra una concesión minera (discusión en sesión de la Licenciatura, mayo de 2018).

Un tercer momento fue la movilización magisterial, a partir de la revitalización del Programa para la Transformación Educativa de Oaxaca (PTEO), en respuesta a la reforma educativa promovida desde el gobierno federal en 2013. Esta propuesta, que incorpora un proyecto educativo comunitario y la especificidad sociocultural del estado de Oaxaca, a partir de un eje colectivo-proyecto, que permite recuperar la cultura comunitaria (Candela *et al.*, 2012), se encontró con la dificultad de aterrizar en las aulas; por lo que muchos docentes comenzaron a llamar a Jaime Martínez Luna para que apoyara en la parte metodológica, es decir, que les ayudara a pensar ¿cómo concretar el PTEO? La respuesta, a partir de un equipo de trabajo, formado por Jaime Martínez Luna, Arturo Guerrero, Benjamín Maldonado, Gustavo Ramírez y Ricardo Peralta, fue la Maestría en Comunalidad, pensada para los profesores de la Sección xxii, que irían a pensar y reflexionar en cómo incorporar la comunalidad, es decir, cómo retomar las formas de aprender desde la comunidad en sus prácticas docentes.

La ruptura con el gobierno del estado, a partir de la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) en 2015 (Hernández, 2017), resultó en la imposibilidad de gestionar recursos para que los docentes asistieran a la maestría, quedando ésta dentro de la UABJO como una maestría de admisión abierta, y con un costo para quienes quisieran cursarla. La primera generación de la maestría ya egresó, y está concluyendo sus trabajos finales para titularse.

A partir de la experiencia de la Maestría en Comunalidad, y de distintas redes y procesos de defensa del territorio y de reflexión colectiva, se gestó la Licenciatura en Comunalidad como enclave estratégico dentro de la universidad pública.¹⁶ Esta propuesta ha encontrado eco en distintos territorios, que desde sus procesos estaban conformando segmentos educativos de nivel superior, especialmente de quienes están en búsqueda de una educación propia, desde los conocimientos de sus comunidades y del fortalecimiento de los procesos de lucha etnopolítica, de defensa de sus territorios y de autodeterminación. Comparten así un horizonte en el que el proyecto de futuro de las comunidades es “permanecer y vivir en sus territorios”, a partir de una educación para y desde los pueblos.

¹⁵ Término acuñado por Floriberto Díaz, indígena mixe de Santa María Tlahuitoltepec, y por Jaime Martínez Luna, indígena zapoteco de Guelatao de Juárez, para explicar las formas de hacer la vida de las comunidades de Oaxaca.

¹⁶ A principios del 2020, el Congreso del Estado aprobó la creación de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, que representa otra plataforma para los proyectos de educación propia (intercultural y comunal) que han surgido dentro del estado, cuyo proceso está en camino (<<https://www.proceso.com.mx/614535/aprueban-la-creacion-de-la-universidad-autonoma-comunal-de-oaxaca>>).

Geopolítica y educación superior. El Istmo y San Pedro Comitancillo

Cuando uno revisa la oferta de educación superior en el istmo, bajo la óptica de la geopolítica, aparece cómo, desde las universidades públicas, se tiene una orientación funcional hacia los proyectos extractivos y de desarrollo que responden a los intereses internacionales, más que a los procesos comunitarios; predominan las ingenierías, resaltan en la UNISTMO¹⁷ la de Petróleos y la de Energías Renovables, así como la Licenciatura en Ciencias Empresariales; en el Instituto Tecnológico del Istmo¹⁸ las ingenierías de gestión empresarial, electromecánica, electrónica, industrial, mecatrónica y sistemas computacionales; además de las licenciaturas en Administración y Contabilidad. Pero no existe oferta de educación superior en Ciencias Sociales, Humanidades, ni en Ciencias Naturales, relacionadas con la ecología, bosques, o manejo de recursos en general (Calvo, 2017; Rojas, 2017).

En el Instituto Tecnológico de Comitancillo se ofertan Ingeniería en Agronomía, Informática, Gestión Empresarial e Industrias Alimentarias. Su visión: “Formar profesionales de nivel superior competentes, con calidad humana, capaces de propiciar el desarrollo regional y del país, bajo criterios de sustentabilidad”.¹⁹ Pero, de acuerdo con las narrativas de varios ex alumnos de esta institución, la carrera de Agronomía se orienta hacia la agroindustria, y las demás carreras tienen como horizonte la preparación de mano de obra para los distintos proyectos que van apareciendo en la superficie del istmo, a partir de los proyectos como las ZEE, o el actual proyecto del Corredor Transístmico (comunicación personal con ex alumnos, 2016).

Así, el incremento previsto en la actividad agroindustrial, agropecuaria, petroquímica, eléctrica, eólica y comercial pareciera marcar la orientación hacia la que se encausa no sólo la oferta, sino la demanda estudiantil en el nivel superior —a raíz de la falta de otras opciones— a las carreras que se puedan desempeñar en estas áreas, señaladas como las importantes desde los procesos de la geopolítica neoliberal. Las empresas eólicas ya establecieron convenios con el Tecnológico de Comitancillo para incluir cursos que convengan a sus necesidades y ofrecen sus espacios para que los alumnos realicen ahí sus prácticas profesionales (personal del tecnológico, 15 marzo 2017, entrevistado por Angélica Rojas). Cabe mencionar que, muchas veces, la mano de obra local está destinada a puestos de mano de obra poco calificada, ya que muchas empresas traen a sus propios encargados y directivos (comunicación personal trabajadores de parques eólicos, mayo de 2015 y julio de 2018).

Por ello, resulta particularmente relevante en esta región que, al menos cinco comunidades, están en movimiento para iniciar su propio grupo de la Licenciatura en Comunalidad los pueblos Unión Hidalgo, Comitancillo, San Miguel Chimalapas, San Francisco Ixhuatán y Ciudad Ixtepec. Localidades que enfrentan procesos de violencia y ataques constantes por ubicarse en el mapa geopolítico que los muestra como espacios idóneos para los proyectos extractivos o de desarrollo. Unión Hidalgo se enfrenta al proyecto de un parque eólico; San Miguel Chimalapas, San Francisco Ixhuatán y Ciudad Ixtepec están en una constante disputa por frenar la entrada de actividad minera, en tanto que Comitancillo, como veremos enseguida, enfrenta la imposición de la construcción de una fábrica de hélices para aerogeneradores. En cada uno de estos lugares, los movimientos etnopolíticos han procurado la defensa de sus territorios desde múltiples estrategias, que pasan por procesos legales, la comunicación y la búsqueda de alianzas, la organización comunitaria, y todos ellos han incluido procesos educativos, en particular, están apostando por procesos de ESI.

En Comitancillo, como parte de las ZEE —que, como se mencionó en el apartado del Istmo, es una continuación de los planes de desarrollo y de la geopolítica del istmo como franja de paso de mercancías—, se anunció “la firma del contrato de comodato entre el ejido y la empresa Tecnologías en Materiales Compuestos (Temaco) para la instalación de una fábrica de aspas y derivados de fibra de vidrio sobre diez hectáreas de dicha comunidad” (Sánchez, 2018), donde el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, firmó en calidad de testigo; se desplegaron los medios de comunicación para asentar una mirada particular sobre el espacio, dándole fuerza a los sentidos desde el desarrollo y el crecimiento económico; así, se llenó la narrativa de las

¹⁷ <<http://www.unistmo.edu.mx/ensenanza.html>>.

¹⁸ <<http://istmo.tecnm.mx/oferta/>>.

¹⁹ <<https://www.facebook.com/pg/seescolares/about/>>.

consabidas promesas de generación de empleos y, sobre todo, la ilusión de que la generación de ganancias para el capital y la industria es ganancia de todos. Este anuncio, de acuerdo con lo discutido en el Segundo Congreso de Comunalidad 2017, implicó el llevar al límite tanto a la situación de emergencia que vivía la comunidad frente al terremoto de ese año, como la toma de decisiones de manera unilateral por parte de las personas en cargos de autoridad, sin la anuencia de la asamblea.

Es decir, a pesar de que hubo ciertas pláticas desde la autoridad y la empresa, todos en el pueblo tenían claro que ese contrato era una decisión tomada sin su parecer, lo cual redundó en una fuerte respuesta comunitaria, en gran medida suscitada por la constante comunicación y difusión de información que realizó el equipo de la Licenciatura en Comunalidad. Como ejemplo de estas respuestas, cuatro días después de realizado el anuncio del inicio de la construcción de la fábrica, pobladores de la comunidad salieron a localizar las mojoneas que marcaban el lugar donde se establecería la fábrica, y las destruyeron para asentar el sentido que la tierra tiene para ellos, es decir, reposicionar el carácter de uso común del área delimitada por la empresa. Esta visita representa, en términos de la geopolítica, la disputa por los significados y percepciones del territorio, al haberse realizado, además, en el Cerro de la Garza, un espacio desde el que se defiende la naturaleza y la cultura (comunicación personal, 2018; Sánchez, 2018).

Si bien no existen organizaciones formalmente establecidas para la defensa del territorio en Comitancillo, la emergencia ocasionada por el terremoto de septiembre de 2017, el Congreso de Comunalidad, que tuvo como acierto la participación de habitantes locales, y la resistencia en 2018 frente a la instalación de la fábrica, han ido gestado procesos colectivos de discusión, organización y resignificación de los espacios comunes, es decir, procesos geopolíticos y etnopolíticos, procesos cuyos antecedentes son diversos proyectos educativos, comunicativos y culturales, como la Radio Binni Racane 103.5 FM de Comitancillo, cuyo objetivo central es el fortalecimiento de la lengua zapoteca (Rojas, 2017).

En este escenario, la propuesta de la universidad no se limita a ser una manera de resistir, sino que es un espacio desde el cual, como proceso colectivo, comunitario y en red con otras comunidades, busca reinventar y recrear las formas de organización, en la expectativa de que “se puede revitalizar la comunidad” (Mariana, habitante de Comitancillo, 2017). El proceso de conformación está aún en ciernes, pero este mismo proceso de intentar, de reunirse, de reflexionar respecto de los embates e imposiciones, es lo que conforma de sentido, gradualmente, a una comunidad —es decir, va creando comunalidad—, y aunque no se ha logrado formalizar su inicio como proceso de escolarización, se gestionan procesos educativos y territorialidades que proponen una geopolítica propia, disputando la geopolítica del estado y la economía transnacional.

Reflexiones finales

Para responder a la pregunta ¿de qué forma los proyectos etnopolíticos de educación superior se insertan en la geopolítica territorial del istmo de Tehuantepec, Oaxaca?, se hizo un recorrido de la forma en que los territorios de los pueblos indígenas en el istmo han sido (y son) espacios construidos a través de múltiples relaciones en distintas escalas, por lo cual la geopolítica permite dar cuenta de cómo estos espacios están inmersos en relaciones de poder, que buscan definir su presente y su futuro, tornándose en conflictos socioambientales y en disputas por las formas de entenderlo, vivirlo y cuidarlo, es decir, son disputas dadas en el escenario de lo simbólico y lo político, entre los proyectos e intereses internacionales y los proyectos e intereses de los pueblos indígenas que ahí habitan.

Se muestra, entonces, cómo distintos movimientos etnopolíticos en la región reivindican la tenencia de la tierra, el poder decidir sobre las formas de producción y la defensa de la naturaleza. Dichos movimientos entretejen la demanda por la autodeterminación, con procesos de autonomía de facto, para permanecer en sus territorios. En algunos casos, estos procesos incluyen proyectos de educación —como proyecto político—, para involucrar y defender a sus jóvenes, lo hacen retomando los sistemas de conocimiento propios, buscando la apropiación y vivencia del territorio, proponiendo con ello horizontes de futuro, fuera del sistema económico, político y epistemológico imperante y, por ende, disputando la geopolítica territorial y la del conocimiento.

En este sentido, la Licenciatura en Comunalidad, desde su origen y conformación, muestra el horizonte educativo y de defensa del territorio, desde lo etnopolítico. Esta propuesta político-identitaria se entreteje con los procesos que en distintos territorios del istmo de Tehuantepec se han vivido y se están viviendo. La Licenciatura toma como tarea la construcción de una propuesta curricular desde lo propio, apostando por recuperar y renovar las formas de organización comunitaria, buscando pensar, soñar y reinventar la vida; en la región del istmo, este proyecto se enfrenta no sólo con mecanismos de despojo y extractivismo, o de agronegocios y monocultivos, sino también con fenómenos como el del sismo del 2017, y con múltiples violencias de parte de distintos actores que actúan también en el territorio, como se muestra en el caso de San Pedro Comitancillo.

Así, la Licenciatura en Comunalidad, como proyecto de educación superior, trasciende su papel de espacio de formación académica, y se torna trinchera de la defensa del territorio y de la vida, desde la cual se apuesta a conformar un orden y un futuro distintos para los pueblos, sus jóvenes y sus territorios, es decir, a plantear otras geografías y otros mundos posibles.

Fuentes

- Aikman, Sheila (1995). "Territory, Indigenous Education and Cultural Maintenance: The Case of the Arakmbut of South-Eastern Peru", *Prospects*, vol. 25, núm. 4: 593-608.
- Anaya, James (1996). "Self-determination: A Foundational Principle", en *Indigenous People in International Law*. Nueva York: Oxford University Press.
- Appadurai, A. (2007). *El rechazo de las minorías. Ensayo sobre la geografía de la furia*. Barcelona: Tusquets (La modernidad desbordada, 2).
- Ávila, Agustín y León Ávila (2017). "Las nuevas zonas económicas especiales en México: despojo agrario y resistencia campesina", *The New Special Economic Zones in Mexico: Agrarian Dispossession and Peasant Resistance*, vol. 20, núm. 40: 138-162, en <<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=129935726&lang=es&site=ehost-live>>.
- Barrón, Juan Carlos (2011). "Theorising Intercultural Relations: A Reflection on Cultural Identities, Violence and Emotional Affects in Mexico". Norwich: UEA, International Development, tesis doctoral.
- Beas, Carlos (2002). *Mesoamérica resiste*. México: GTCI.
- Bello, Á. (2004). *Etnicidad y ciudadanía en América Latina*. La acción colectiva de los pueblos indígenas. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), en <<https://repositorio.cepal.org/handle/11362/2394>>.
- Blaser, Mario, Harvey Feit y Glenn McRae (2004). *In the Way of Development: Indigenous Peoples, Life Projects and Globalization*. Londres: Zed Books, en <<http://www.mtnforum.org/sites/default/files/publication/files/1372.pdf>>, consultada el 13 de junio de 2016.
- Booz, Allen y Hamilton (2000). "Iniciativa para la integración de la infraestructura básica entre México y los países del istmo centroamericano". Washington: Banco Interamericano de Desarrollo, noviembre, 72 pp.

- Bray, David D., Barton Bray, L. Merino-Pérez y D. Barry, eds. (2005). *The Community Forests of Mexico, Managing for Sustainable Landscapes*. Austin: University of Texas Press, en <[https://doi.org/10.1659/0276-4741\(2007\)27\[97:TCFOMM\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1659/0276-4741(2007)27[97:TCFOMM]2.0.CO;2)>.
- Calvo, Carolina (2017). “Diagnóstico de la educación superior en Oaxaca desde una perspectiva institucional”. Documento de trabajo.
- Candela, Antonia, María de Ibarrola, Ruth Mercado y Elsie Rockwell (2012). “Comentarios generales al Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca”, núm. 1: 1-29.
- Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM) (2014). “Estudio de la minería en México. Un análisis comparado con Canadá”. México: Secretaría de Gobernación, en <http://www.cdpim.gob.mx/v4/pdf/e_minero.pdf>.
- Connolly, Priscilla (1994). “De ida y vuelta al siglo pasado: políticas de inversión, relaciones de producción y dependencia económica”, *Sociológica* (UAM Xochimilco), vol. 9, núm. 26: en <<http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/2609.pdf>>, consultada el 13 de junio de 2016.
- Corbett, Michael (2000). *Learning to Leave: The Irony of Schooling in a Coastal Community*. Ottawa: Fernwood.
- Chapela, Francisco (1999). “Emergencia de las organizaciones sociales de Oaxaca: la lucha por los recursos forestales”, *Alteridades*, vol. 9, núm. 17: 105-112, en <<https://alteridades.izt.uam.mx/index.php/Alte/article/view/463>>.
- Díaz Polanco, Héctor (1992). “El fuego de la inobediencia. Autonomía y rebelión india en el Obispado de Oaxaca”, en *Documentos sobre las rebeliones indias de Tehuantepec y Nexapa (1660-1661)*. México: CIESAS-SEP.
- Dodds, Klaus y David Atkinson (2000). *Geopolitical Traditions: A Century of Geopolitical Thought*. Londres. Routledge.
- Flores Cruz, Rosa Marina (2015). “La disputa por el istmo de Tehuantepec: las comunidades y el capitalismo verde”. México: UAM Xochimilco, Posgrado en Desarrollo Rural, tesis de maestría.
- Garibay, C. (2010). “Paisaje de acumulación minera por desposesión campesina en el México actual”, en G. C. Delgado, comp., *Ecología política de la minería en América Latina*. México: CIIH, UNAM (El mundo actual: situación y alternativas), pp. 133-181.
- Glick, Edward (1953). “The Tehuantepec Railroad: Mexico’s White Elephant”, *Pacific Historical Review*, vol. 22, núm. 4: 373-382.
- Global Witness (2016). “Deadly Environment. A Rising Death Toll on Our Environmental Frontiers is Escaping International Attention”, en <<https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/deadly-environment/>>, consultada el 13 de junio de 2016.
- Gupta, Akhil y James Ferguson (1992). “Beyond ‘Culture’: Space, Identity and the Politics of Difference”, *Cultural Anthropology*, vol. 7, núm. 1: 6-23.
- Hernández Ruiz, Samael (2017). “Movimiento social y coyuntura: la sección XXII del SNTE”, *Revista Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales*, núm. 2: 24-57.

- Hiernaux, Daniel (2002). "El Plan Puebla Panamá: ¿una nueva visión del desarrollo regional?". Quebec: Groupe de recherche sur l'intégration continentale.
- Hiernaux, Daniel (1995). "Reestructuración económica y cambios territoriales en México: un balance 1982-1995", *Revista de Estudios Regionales*, núm. 43: 151-176, en <<http://www.revistaestudiosregionales.com/documentos/articulos/pdf475.pdf>>, consultada el 13 de junio de 2016.
- Hirsch, Joachim (2001). *El Estado nacional de competencia. Estado, democracia y política en el capitalismo global*. México, UAM Xochimilco.
- Kuntz-Ficker, Sandra (2000). "Fuentes para el estudio de los ferrocarriles durante el porfiriato", *América Latina en la Historia Económica*, vol. 7, núm. 13 (enero): 137-148, en <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18232/alhe.v7i13/14.269>>.
- Lefebvre, Henri (1991). "Production of Space (Extracts)", en Jen Jack Gieseking *et al.*, eds., *The People Place and Space Reader*. Nueva York: Routledge, pp. 289-294
- Lefebvre, Henri (1974). "La producción del espacio", *Papers: Revista de Sociología*, núm. 3: 219-229, en <http://blogs.fad.unam.mx/asignatura/nadia_osornio/wp-content/uploads/2014/05/lefebvre-la-produccion-del-espacio.pdf>, consultada el 13 de junio de 2016.
- Marino, Daniela (2001). "La desamortización de las tierras de los pueblos (centro de México, siglo XIX). Balance historiográfico y fuentes para su estudio", *América Latina en la Historia Económica*, vol. 8, núm. 16: 33-43.
- Martin, Adrian (2013). "Global Environmental In/justice, in Practice: Introduction", *The Geographical Journal*, vol. 179, núm. 2 (junio): 98-104.
- Martínez-Laguna, Norma, María Teresa Sánchez-Salazar y José María Casado Izquierdo (2002). "Istmo de Tehuantepec: un espacio geoestratégico bajo la influencia de intereses nacionales y extranjeros. Éxitos y fracasos en la aplicación de políticas de desarrollo industrial (1820-2002)", *Investigaciones Geográficas*, núm. 49: 118-135, en <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-46112002000300008&lng=es&tlng=es>, consultada el 11 de abril de 2019.
- Martínez, Jaime (2015). "Conocimiento y comunalidad", *Bajo El Volcán*, vol. 15, núm. 23 (septiembre-febrero): 99-112, en <<http://www.redalyc.org/pdf/286/28643473006.pdf>>.
- Mateos-Cortés, L.S., y G. Dietz (2016). "Universidades interculturales en México. Balance crítico de la primera década", *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, vol. 21, núm. 70: 683-690, en <<https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2005.07.009>>.
- Massey, Doreen, John Allen y Philip Sarre (1999). "Human Geography Today", *Polity Press* (Cambridge).
- Morosin, A. (2017). "Enforcing Accumulation in a Geo-Strategic Region: Paramilitary Threats Against Indigenous Activists in Oaxaca, Mexico", en Jasmin Hristov, Jeb Sprague-Silgado y Aaron Tauss, eds., *The Political Violence of Capital: Paramilitary Formations in Global Perspective* (en prensa). pp. 1-22.

- Ostrom, Elinor (2000). *El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva* (governing the commons). México: CRIM, UNAM/Fondo de Cultura Económica.
- Rodman, Margaret C. (1992). "Empowering Place: Multilocality and Multivocality", *American Anthropologist*, vol. 94, núm. 3: 640-656, en <<https://doi.org/10.1525/aa.1992.94.3.02a00060>>.
- Rojas, Angélica (2017). "Contexto de la Universidad Comunalidaria". Oaxaca: Conacyt/CIESAS Pacífico Sur, documento de trabajo.
- Sánchez Contreras, Josefa (2018). "Rechazo a la fábrica de aspas", *Ojarasca*, 14 de julio, en <<https://ojarasca.jornada.com.mx/2018/07/14/rechazo-a-la-fabrica-de-aspas-482.html>>, consultada el 31 de julio de 2020.
- Sánchez Juárez (2017). "La geopolítica crítica y el análisis de los procesos de desarrollo: el caso de las zonas económicas especiales en Oaxaca", en Manuel Garza y Eduardo Bautista, coords., *Políticas y alternativas frente a la crisis capitalista*. Oaxaca: UABJO.
- Soto Sánchez, Alma, Érica González y Susana Vargas (en prensa). *La perspectiva etnopolítica en el estudio de la educación superior y los pueblos indígenas de México*.
- Soto Sánchez, Alma y Juan Carlos Robles Gil (2008). "Construcción de la identidad de los jóvenes del Istmo de Tehuantepec en sus ámbitos cotidianos de interacción y participación". México: UAM Xochimilco, Posgrado en Desarrollo Rural, tesis de maestría.
- Soto Sánchez, Alma (2016). "Desenmarañando la disputa ontológica: los jóvenes y los territorios entretnejidos con las violencias hacia los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca". México: UAM Xochimilco, Posgrado en Desarrollo Rural, tesis de doctorado.
- Toledo, Víctor (1999). "El otro zapatismo. Luchas indígenas de inspiración ecológica en México", *Ecología Política*, núm. 18: 11-22, en <https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/153395.pdf&hl=es&sa=T&oi=gsb-ggp&ct=res&cd=0&ei=YOkZW8jCY2wyASlgb6QBQ&scisig=AAGBfm0-LX-wNTg9252hSTVIGOSVUqGBgA>, consultada el 5 de marzo de 2019.
- Winder, David (1992). "De concesión maderera a comunidad forestal. Cambio político, económico y social en la Sierra Juárez, Oaxaca", Nueva York: St. Antonys College, Seminario Latinoamericano, 18 pp., en <<http://era-mx.org/documentosinteres/manejosostenible/Winder92.pdf>>.
- Woodrow, Borah (1954). "Early Colonial Trade and Navigation Between Mexico and Peru", *The Journal of Economic History*, vol. 16, núm. 3: 385-386. DOI: <[10.1017/S0022050700059386](https://doi.org/10.1017/S0022050700059386)>.